



En México, la sombra del populismo está llevando al país a un terreno peligroso, siguiendo un patrón alarmante que ya ha erosionado la independencia judicial en otras naciones.

Los líderes populistas a menudo justifican la erosión de la independencia judicial enmarcándolas como necesarias para proteger la soberanía nacional y defender la voluntad del pueblo. Argumentan que las élites tradicionales, incluido el Poder Judicial, obstruyen la voluntad popular, son corruptas o antidemocráticas y que, por lo tanto, deben ser “reformadas” para servir al pueblo.

Al presentarse como los verdaderos representantes del pueblo, utilizan la retórica populista para obtener apoyo público a sus acciones. Esta estrategia no sólo ayuda a legitimar sus esfuerzos por controlar el Poder Judicial, sino que también neutraliza la oposición al presentarla como desconectada de la población.



En Turquía, en 2016, el presidente **Recep Tayyip Erdoğan** hizo campaña para subyugar al Poder Judicial, especialmente después de un fallido intento de golpe de Estado por parte de una facción del ejército. Utilizando un estado de emergencia como pretexto, purgó a miles de jueces y fiscales, acusándolos de estar vinculados a los conspiradores del golpe. Esta purga masiva no sólo debilitó la capacidad del sistema judicial para operar independientemente, sino que permitió al Presidente reemplazar a los jueces con individuos leales a su régimen; uno presidencialista con los poderes Legislativo y Judicial subyugados.

Por otro lado, en Hungría, **Viktor Orbán** ha seguido un camino similar, aunque con un enfoque más gradual y calculado. Desde su llegada al poder en 2010, **Orbán** ha implementado cambios constitucionales que le

han permitido controlar los nombramientos judiciales y limitar la capacidad del Tribunal Constitucional para revisar las leyes promulgadas por su gobierno.

Uno de los cambios más significativos fue la reducción de la edad de jubilación para los jueces de 70 a 62 años, lo que obligó a la jubilación anticipada de casi 300 jueces, muchos de ellos miembros de los tribunales más altos. Este movimiento permitió al gobierno reemplazar a jueces con personas leales a su partido.

Estos movimientos no fueron ataques aislados a la independencia judicial, sino parte de una estrategia más amplia para centralizar el poder y minimizar la oposición política. Al erosionar la independencia de los tribunales, tanto **Erdogan** como **Orbán** debilitaron las instituciones democráticas y dejaron sus decisiones sin control constitucional o contrapesos.

La debilitación de la judicatura no sólo afecta la justicia y la legalidad, sino que también envía la preocupante señal de que es posible socavar la democracia desde adentro, utilizando las mismas herramientas del Estado para dismantelar sus salvaguardias.

En México, estamos avanzando en ese camino con la aprobación al vapor de una reforma judicial que concluirá en septiembre. La diferencia es que la economía mexicana es 7.5 veces más grande que la de Hungría y 1.4 veces más grande que la de Turquía, además de que somos el principal socio comercial de Estados Unidos y Canadá, el mercado de comercio internacional más grande del mundo.



Será el error de septiembre, un error que podría costarle a México no sólo su independencia judicial, sino también su posición como un pilar en la economía global.